

Crecen los contagios y la pobreza



IMPUESTO A LAS GRANDES RIQUEZAS

YA

Por una cuarentena sin hambre ni rebaja salarial y un IFE de \$30.000

Estamos en el ojo del huracán de las dos pandemias. La del coronavirus, con el crecimiento exponencial de los contagios en el AMBA y el serio riesgo de que en cualquier momento colapse el sistema de salud. Y la de la crisis económica y social, con la actividad cayéndose a pique, el aumento de los despidos, las suspensiones, las rebajas salariales y el aguinaldo en cuotas. Con millones de cuentapropistas, vendedores, profesionales independientes, o simplemente aquellos que hacen changas sumidos en la desesperación por no poder conseguir ni siquiera lo mínimo e indispensable para llevar a su casa.

Alberto Fernández insiste en volcar toda la responsabilidad en nuestra conducta. “¡Quédense en su casa!”. Los trabajadores y los sectores populares somos los primeros en ser conscientes de los riesgos del contagio en las calles. Mientras los ricos, los miembros del establishment, presionan “por la economía” (pero viajan sin riesgos en sus autos particulares), los que corren riesgos son los trabajadores que todos los días tienen que jugar a la ruleta rusa en los medios de transporte público, o que deben reclamar, más de una vez infructuosamente,

que las patronales cumplan con las medidas sanitarias mínimas. Seamos claros, los millones que salen todos los días a la calle son, en su gran mayoría, trabajadores de las industrias “esenciales” o de otras que, sin serlo, se las ingeniaran para también estar “autorizadas”. Para muestra basta un botón, se acaba de autorizar a 2.500 empresas no esenciales a operar bajo la excusa de que son “exportadoras” (Infobae, 30/6). Autorizadas por el gobierno nacional de Fernández, el provincial de Kicillof y el de la Ciudad de Larreta.

Por supuesto que también hay decenas de miles que, sin trabajo fijo, se ven obligados a romper la cuarentena para salir a hacer una changa, vender algo en la calle o incluso abrir

“clandestinamente” su pequeño comercio, peluquería, o lo que fuere para tratar de conseguir una moneda. La responsabilidad no es de ellos, sino del gobierno, que pretende que todo un grupo familiar viva con los 10.000 pesos de la IFE. Y encima ahora ese monto ya no lo recibirán en el interior del país, quedó reservado solo para el AMBA y Chaco.

Hay un hecho que es incontrastable, el dinero que el gobierno peronista de Fernán-

Pero resulta que el tan mentado impuesto a la riqueza que prometió Alberto Fernández hace ya noventa días “duerme el sueño de los justos”. ¡Ni siquiera se presentó en el Congreso, donde el único proyecto al respecto sigue siendo el del Frente de Izquierda Unidad!

Lo decimos con todas las letras, necesitamos una cuarentena sin hambre, despidos ni rebajas salariales. Tiene que aparecer la plata para salud, para aumentar la infraestructura hospitalaria, para tomar más personal con salarios que cubran la canasta familiar, para más tests. Hay que centralizar el sistema de salud para que se lo pueda utilizar eficientemente ante el riesgo de quedarnos sin camas. Y, al mismo tiempo, el pueblo trabajador tiene que poder cumplir con la cuarentena sin la incertidumbre de saber si mañana va a poder comprar los productos esenciales. Hay que otorgar, y mantener, un subsidio de 30.000 pesos a todos aquellos que lo necesitan. Hay que volcar masivamente comida en los barrios populares. Hay que darle créditos a tasa cero a los pequeños comerciantes sin las



Crecen los contagios y la pobreza: exigamos el impuesto a las grandes riquezas

dez destinó a la pandemia es, en proporción al tamaño de la economía argentina, mucho menos que el que dedicaron otros países. Y no solo nos referimos a los europeos, la Argentina le asigna el 3% del PBI, mientras que Japón destina el 21%, Estados Unidos 13%, e incluso en Latinoamérica, Perú gasta el 9%, Brasil 8%, Paraguay 6% y Chile 5% (La Nación, 19/5).

Pero veamos el motivo por el cual no se destina más plata a la pandemia. La única forma de hacerlo es sacarla de donde efectivamente está, en manos de los multimillonarios y sus empresas (Galperín, Rocca, Perez Compac, junto con las grandes multinacionales que operan en el país, Cargill, los bancos, Toyota, Volkswagen, etcétera).

trabas con que se encuentran actualmente. Se deben retrotraer las rebajas salariales, pagar los aguinaldos como corresponde y prohibir de verdad las suspensiones y los despidos. Como dijimos más arriba, todo esto requiere plata. Los 20.000 millones de dólares que, como explicamos en el proyecto del Frente de Izquierda Unidad, se podrían obtener de un impuesto a las grandes riquezas. Que, junto con dejar de pagar la deuda externa, proveería los recursos para un fondo de emergencia capaz de atender las dos pandemias, la sanitaria y la social, la del coronavirus y la del hambre. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad te convocamos a pelear por esto.

Cien días de cuarentena: el pueblo trabajador cumple y el gobierno...

Escibe **Reynaldo Saccone**
ex presidente de la Cicop

Se cumplieron los cien días de cuarentena y la campaña anti Covid-19 llevada adelante en acuerdo bipartidario por el gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández y los gobiernos de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires y Axel Kicillof en la provincia bonaerense. Ante el comienzo de una escalada en el número de casos y de muertes, se impone hacer un balance del resultado de las medidas hasta el momento.



El pueblo trabajador cumplió seriamente con la cuarentena, algo que significó tremendas privaciones para los trabajadores en negro y cuentapropistas. Al mismo tiempo que el gobierno abría las industrias en favor de las multinacionales. Veamos lo que debería haber hecho Fernández y no hizo.

En primer lugar, no rodeó el aislamiento con las medidas de apoyo económico a los trabajadores que hubieran permitido sostenerlo, mientras subvencionó a los grandes grupos económicos. A medida que transcurrían las semanas, en forma creciente, millones de trabajadores se veían obligados a exponerse buscando su sustento diario. Así las cosas, la cuarentena se fue debilitando con la consiguiente pérdida de su valor preventivo.

En segundo lugar, no fortaleció el sistema de salud. Los presupuestos permanecieron en los montos asignados; el recurso humano, ni por asomo se aproximó a lo necesario. Como ejemplo, en la provincia de Buenos Aires Cicop venía reclamando 2.500 nombramientos de profesionales para mantener operativos los hospitales; pasados cien días, hubo 650 designaciones, apenas el 25% de lo necesario para un funcionamiento normal sin pandemia.

En la Capital Federal hay 2.000 camas de terapia intensiva (UTI, 400 públicas y 1.600 privadas). La provincia de Buenos Aires cuenta con 4.856 camas de unidades de UTI. Según fuentes oficiales, desde marzo se incorporaron al sistema de salud 2.996 camas UTI de adultos, lo que representa un incremento del 35%; y de este total, unas 2.062 (69%) pertenecen al sector público. Estas cifras que impresionan por la magnitud del incremento, merecen un análisis. Hay hospitales de provincia en que las unidades coronarias han pasado a considerarse UTI; asimismo salas enteras de especialidades como, por ejemplo, cardiología e incluso cirugía han pasado a denominarse UTI. Las camas no son cuestión de mueblería solamente. Necesitan equipo y personal las 24 horas. De nada valen las camas sin los recursos humanos entrenados y los tecnológicos necesarios. Por eso están a poco de colapsar los hospitales y el sistema de salud.

En tercer lugar, no cuida al personal de salud. Un trabajo de Infobae revela que hay 3.652 trabajadores de salud contagiados, aunque otras fuentes dan 4500. De esa

cantidad, 19 han fallecido. Las causas de este sacrificio de vidas son muchas. Una, es el déficit tanto en cantidad como en calidad de los elementos de protección personal (EPP). Otra, es la obligación de seguir trabajando en los hospitales y centros de salud de aquellos que son portadores de alguna condición patológica de riesgo. A diabéticos, hipertensos, bronquiales crónicos, embarazadas se les niega tenazmente licencias, igual que los mayores de 60 años.

Desde el comienzo, los profesionales de la salud, hemos planteado los tests sistemáticos del personal hospitalario y otros trabajadores en riesgo. También lo hicimos para poblaciones reclusas como geriátricos, institutos de salud mental y cárceles. A pesar de que la experiencia europea indicaba que el personal de salud y, especialmente, los residentes de geriátricos eran quienes proporcionaban la mayor cantidad de víctimas fatales, tanto en Capital como en Provincia las autoridades se resistieron férreamente. Tuvieron que pasar 100 días para que Larreta anunciara que testearon al personal de salud de la CABA. De la provincia, todavía no se tienen noticias.

Para evitar estos problemas, propusimos desde el inicio de la epidemia la conformación de comités de crisis en cada establecimiento de salud con representantes de los trabajadores para monitorear las medidas de seguridad, el reparto de turnos, la provisión de EPP, y otros temas de la organización que permitieran atender mejor la epidemia y protegerse. Estos comités solo pudieron integrarse en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, después de un duro forcejeo de varias semanas de la Cicop con el gobierno de Kicillof que finalmente tuvo que aceptar que se conformaran a nivel ministerial y de cada establecimiento.

En el ámbito privado la situación de los trabajadores es mucho peor, y son innumerables los casos de contagio denunciados por los propios trabajadores. En la mayoría de los establecimientos la complicidad entre las patronales sanatoriales y la burocracia sindical de Sanidad (ATSA) acalla, con el miedo al despido, la voz de la mayoría. A tal punto que el personal, resignadamente, compra por su cuenta los EPP.

En cuarto lugar, el gobierno subsidia a los prestadores

privados. Lo hace por distintas vías. La mayoría de las empresas privadas dueñas de sanatorios, incluyendo las más poderosas, se han acogido al subsidio estatal que paga la mitad de los sueldos del personal y en muchos casos se han acogido a la posibilidad de reducir los salarios; aun aquellos prepagos que cobran cuotas siderales. Además, reciben subsidios estatales a través de la burocracia sindical de la CGT por atender Covid-19. Tomó estado público el subsidio de 400 millones que Kicillof otorgó a los prestadores privados de IOMA, la obra social del personal de la provincia de Buenos Aires y "caja" y nido de corrupción de todos los gobiernos de cualquier signo.

Cerrando este balance negativo de la acción mancomunada de peronistas y macristas, cobra enorme importancia la falta de centralización del sistema, que ni siquiera en el AMBA, en que hubo cierto grado de coordinación entre las jurisdicciones, se logró. Tomando el ejemplo de la República de Irlanda hemos planteado la necesidad de centralización bajo una sola conducción de todos los recursos, tanto estatales como privados. En Irlanda el estado nacionalizó todas las camas, todo el personal y todos los laboratorios de análisis, para garantizar la equidad y que los cuidados llegaran a toda la población. Nosotros hemos planteado, además, la nacionalización de ciertos sectores de la producción para proveer de insumos, barbijos, EPP, gel, medicamentos para la población de riesgo y otras medidas.

Nada de esto se ha hecho y por eso, a los cien días de una cuarentena sostenida ejemplarmente por el pueblo trabajador, seguimos en riesgo. La lucha contra la pandemia ya no es más que una cuestión de la epidemiología, es una cuestión que se dirime en el campo de la política. Lo que hace falta son las medidas políticas que hemos enunciado, financiadas por un impuesto especial a las grandes riquezas y por el no pago de la deuda externa, por las que es necesario continuar la lucha. En definitiva, para que la crisis no la paguen los trabajadores, sino los capitalistas.

¡Impuestos a las grandes riquezas ya!

Escribe **José Castillo**

La crisis del Covid-19 todavía no llegó a su pico. Los riesgos de que tanto la infraestructura existente como el propio personal de salud se vean desbordados son un peligro real. Al mismo tiempo, vemos cómo la miseria, el hambre y la desocupación siguen creciendo día a día.

¿Qué hacer? La respuesta es simple. Hay que reforzar una auténtica cuarentena que todo el pueblo trabajador pueda cumplir, sin hambre, sin tener que salir a romperla para “changuear y conseguir un peso”. Hay que poner más plata en recursos para salud. Para todo esto hace falta una sola cosa, poner en juego más dinero. Con lo volcado actualmente por el gobierno claramente no alcanza.

No cabe ninguna duda, esos recursos tienen que salir de los que los tienen, y en abundancia. Para eso hay que imponer de una vez por todas el impuesto a las grandes riquezas.

Miremos a nuestro alrededor. En los últimos tres meses, ya en plena pandemia, Mercado Libre pasó a valer tres veces más, aumentando su valor en 18.000 millones de dólares. ¡Creció más que Amazon! No llama entonces la atención que su dueño, Marcos Galperín, figure como uno de los grandes multimillonarios argentinos.

Observemos a los bancos, los grandes ganadores de los dos últimos años, mientras la economía argentina se hundía, caían los salarios y crecía el desempleo. ¡Hasta siguieron ganando en estos meses de cuarentena! Los cuatro que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires, y por lo tanto tienen que “mostrar” sus balances (Galicia, Macro, Supervielle y Patagonia) registraron ganancias en 2019 que más que duplicaron las del año anterior. Los bancos extranjeros que actúan en nuestro país –HSBC, ICBC, Santander y Citi– también tuvieron superganancias y encima se dieron el lujo de “fugarlas” legalmente, repatriándolas hacia sus casas matrices.

Miremos a las grandes empresas de otros sectores, ahí tenemos al Grupo Techint. Acá no hay excusa, Tenaris, la firma insignia del conglomerado, junto con Ternium, son dos de las que más facturan en nuestro país. La fortuna personal de su dueño, Paolo Rocca, figura al tope de los multimillonarios argentinos registrados por la revista Forbes.

Pasemos ahora a uno de los empresarios y gran amigo del peronismo, Marcelo Mindlin, el dueño de Pampa Energía, que



la semana pasada recibió todos los elogios de parte del presidente Alberto Fernández. Además de estar seriamente sospechado en un montón de causas de corrupción que vienen de la anterior época kirchnerista, Mindlin siempre siguió facturando, acumulando propiedades y obteniendo superganancias con todos los gobiernos. Es el dueño de Central Puerto, la empresa que tuvo más ganancias de todas las que cotizan en la Bolsa porteña, pero también de Edenor, una de las que históricamente más estafa a los usuarios de electricidad, por citar solo dos firmas.

Sigamos repasando la lista de las que más facturaron y ganaron en 2019: Telecom, vinculada al Grupo Clarín; Toyota, la transnacional japonesa que, junto con la alemana Volkswagen, son las dos automotrices que más venden en nuestro país; Panamerican Energy, propiedad de otro de los multimillonarios locales, Alberto Bulgheroni; Shell, que hasta hace poco se dio el lujo de colocar a su ex Ceo Juan José Aranguren como ministro de Energía y que recibió todo tipo de beneficios durante la gestión macrista; Arcor, el gran grupo alimentario local.

Y, por supuesto, a los grandes monopolios del complejo agroexportador: las yanquis ADM, Bunge, Cargill, la europea Dreyfuss, la china Cofco y las locales Molinos (de Perez Companc, otro que figura en la lista de multimillonarios) y Aceitera General Deheza.

A esta lista le podemos agregar laboratorios, también con millonarios locales a la cabeza, como Roemmers y Bagó. O las cadenas de hipermercados, con Coto, Walmart o Carrefour a la cabeza.

Este grupo concentrado de grandes empresas (y de multimillonarios) es al que hay que obligar para que ponga una porción de sus ganancias y riquezas para atender la pandemia. De esto se trata, imponer un impuesto a las grandes riquezas.

Hace más de tres meses Alberto Fernández, en un alarde más de su doble discurso, habló de un impuesto que, si bien no iba a fondo contra todos estos sectores, planteaba algún tipo de imposición a la gran riqueza. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad insistimos en que hacía falta un tributo mucho más completo y con alícuotas mucho más altas. Pero sostuvimos, sin embargo, que lo importante era que el proyecto se pusiera en marcha y exigimos que el gobierno lo presentara de una vez por todas.

Vergonzosamente, el Frente de Todos le empezó a dar vueltas al tema sumando excusa tras excusa. Primero que no podía salir por DNU y que requería que se reuniera el Congreso (cuando aún no se había acordado el funcionamiento virtual), luego que se estaba “consensuando” entre diferentes proyectos redactados por varios diputados del oficialismo. Lo concreto es que pasaron las semanas, los meses, y el proyecto nunca apareció. El único presentado es el del Frente de Izquierda Unidad, que plantea la posibilidad de recaudar rápidamente 20.000 millones de dólares. Pasó algo peor aún, en una sesión en Diputados, cuando planteamos que se tratara el tema, votaron en contra conjuntamente el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Cada vez empieza a quedar más claro que el planteo del presidente Fernández fue solo un “amague” y que en realidad no piensa presentar proyecto alguno.

Mientras tanto, la crisis del coronavirus arrecia y sume en la desesperación y el miedo al contagio a cada vez más sectores del pueblo trabajador.

¡No podemos seguir esperando! El dinero para resolver las necesidades de la pandemia existe. Hay que implementar ya mismo el impuesto a las grandes riquezas. De esa manera, juntamente con la suspensión inmediata de los pagos de deuda externa, tendremos los recursos necesarios para conformar un fondo de emergencia que atienda las necesidades sanitarias más urgentes en términos de salud, comida para los barrios populares y soluciones para una crisis social que se sigue profundizando día a día.

Recortes del IFE y el drama de los pequeños comerciantes

Escribe **Diego Martínez**

El viernes pasado Alberto Fernández hizo un nuevo anuncio de extensión de la cuarentena. De forma solapada, anunció allí una nueva medida que profundiza aún más el ajuste que estamos sufriendo los trabajadores, el recorte de 50.000 millones de pesos en el Ingreso Familiar de Emergencia (lapoliticaonline, 26/6/2020). A partir de ahora solo van a recibir este subsidio quienes venían cobrándolo en CABA, Gran Buenos Aires, ciudad de Córdoba y Chaco. Los cinco millones de beneficiarios restantes quedarán afuera. Ya cuando empezó el IFE a cuatro millones de personas que lo solicitaron no se les otorgó. Fernández se llena la boca diciendo que su prioridad es proteger a los más vulnerables, pero deja nueve millones de personas con graves problemas económicos a la deriva.

La excusa para el recorte del IFE es que en aquellas provincias donde se flexibiliza la cuarentena la economía “está en marcha” y no haría falta. Esto es una completa mentira. La economía del país está en una profunda recesión en su conjunto y está recesión no se termina mágicamente con el levantamiento de la cuarentena. El propio Fernández negó de hecho esta idea cuando declaró que “el problema de la economía no es la cuarentena sino la pandemia” (Página/12, 26/5/2020). Muchos cuentapropistas que realizan trabajos relacionados con la construcción como albañilería, plomería, electricidad, entre otros, aunque estén habilitados, en algunos lugares del país no tienen trabajo porque está parada la actividad económica. Otro tanto sucede con el 43% de los trabajadores informales (en negro) que hay en el país, quienes cobran su sueldo de forma irregular, si es que aún conservan el empleo. Entre ellos se encuentran millones que cobraron el IFE y ahora lo van a perder.

El problema de la pobreza y el empleo precario no empezó

con la pandemia, la propia Fernanda Raverta, titular de la Anses, quien ejecutó el recorte sobre el IFE, lo reconoce cuando declaró: “Vivimos en una Argentina muy desigual, profundizada por un gobierno con un modelo económico que generó que los niveles de indigencia y pobreza sean enormes y que generó que una enorme cantidad de argentinos y argentinas no tengan un ingreso formal, entonces hay que buscar una respuesta”. Si Raverta realmente quiere encontrar una respuesta a los problemas que enuncia, el gobierno debe dar marcha atrás con el recorte, mantener el IFE en todo el país y otorgar una suma de 30.000 pesos en lugar de los miserables 10.000 pesos que se dan hasta el momento, de forma que los beneficiarios pueden realmente subsistir, y dar el subsidio a todo el que lo necesite.

Otro sector que viene siendo perjudicado por la política del gobierno es el de los pequeños comerciantes. Desde que empezó la cuarentena solo en la ciudad de Buenos Aires el 20% de los comercios cerró sus puertas (Infobae, 16/6/2020). El gobierno y sectores de la oposición patronal hablan de distintos proyectos para favorecer a las pymes, pero detrás de este discurso se esconde una trampa. El término “pyme” incluye a empresas denominadas “medianas” que cuentan con cientos de empleados y tienen espaldas para bancar la crisis. Muchas de ellas están vinculadas con grandes firmas, además de cobrar el ATP que las beneficia con el pago del 50% de los sueldos de sus empleados. Los que están verdaderamente perjudicados son los pequeños comerciantes, dueños de talleres mecánicos, kioscos, librerías, negocios de indumentaria, entre otros. Mientras beneficia rápidamente a los grandes grupos económicos, el gobierno no tiene ninguna respuesta para este sector, dice ofrecerles créditos con garantía estatal pero ponen tantas trabas burocráticas que terminan resultando inaccesibles. Exigimos que se otorguen créditos a tasa cero a los que se pueda acceder rápidamente para que estos



pequeños comerciantes no se vayan a la ruina y que también se atienda la situación de sus trabajadores, los primeros perjudicados por esta situación. La mayoría trabaja en negro, por lo que ni siquiera cobra el 50% del sueldo que paga el gobierno. Para ellos también es necesario un IFE de 30.000 pesos y no la burla que cobran hasta el momento.

Lo venimos señalando con claridad, el gobierno debe garantizar las condiciones para que el pueblo trabajador pueda hacer realmente la cuarentena sin hambre, despidos ni rebaja salarial y sin exponerse al contagio. Esa necesidad es más imperiosa que nunca ahora que estamos llegando al pico de la pandemia. Para que los trabajadores y sectores populares puedan hacer la cuarentena sin pasar penurias ni arriesgarse a salir a la calle para conseguir de forma desesperada algún ingreso, el gobierno tiene que aplicar un impuesto a los grandes grupos económicos, bancos y multinacionales que siguen amasando fortunas multimillonarias aun durante la pandemia, para tomar con ese dinero las medidas sociales necesarias para solucionar los graves problemas del pueblo trabajador y los sectores populares.

El gobierno retrocede con la expropiación de Vicentin

Escribe **Adolfo Santos**

Nada va quedando del grandilocuente anuncio de Alberto Fernández acerca de la intervención y expropiación de Vicentin. Tras reducir primero todo al término “rescate”, finalmente no quedó en pie ni siquiera la intervención. Vicentin va quedando cada vez más como otro ejemplo del doble discurso del gobierno, “archivado” como el impuesto a la riqueza.

Al comienzo se iba a intervenir y expropiar. Luego se pasó a “dialogar” para “rescatarla”. Y ahora desaparece cualquier mención a la expropiación y se activa la propuesta del gobernador

Perotti, de intervención vía la Inspección de Justicia de Santa Fe. Finalmente, y tal como era de esperar, se dejó todo en manos del juez de la causa de Reconquista, virtual peón de la familia Vicentin, que simplemente le “restituyó” el control y el gerenciamiento a sus antiguos dueños. No quedó en pie nada, ni siquiera la intervención, degradada meramente a la presencia de “veedores”, que no inciden absolutamente en nada. Y, por si faltara algo, el juez estiró la convocatoria de acreedores hasta agosto. ¿Qué dijo el gobierno de Alberto Fernández? Absolutamente nada.

Todo es un escándalo. Más aún cuando cada día se conoce más la historia mafiosa de la empresa. Durante el gobierno de Onganía recibió extensas parcelas de tierra en la provincia de Santa Fe donde desarrolló sus actividades agrícolas sin pagar un peso; después, el tristemente recordado Martínez de Hoz le facilitó las condiciones para instalar el puerto que posee en Rosario, a cambio de lo cual fueron cómplices de la dictadura, veintidós trabajadores, catorce de ellos delegados sindicales, desaparecieron. Con Domingo Cavallo consiguieron la estatización de su deuda. Existen múltiples denuncias de comercio de triangulación, vía Paraguay, de contrabando de granos al exterior, pagos en negro



y evasión de impuestos. En complicidad con altos funcionarios del Banco Nación, durante el gobierno de Macri, Vicentin obtuvo créditos que exceden sus garantías, dinero que habría ido a parar a paraísos fiscales, aunque la deuda con el Nación asciende a 18.000 millones de pesos. Con todo, amenaza con una quiebra fraudulenta que dejaría a miles de trabajadores en la calle, una gran cantidad de pequeños productores rurales sin cobrar sus cosechas y una deuda inmensa con el Estado.

A pesar de todo esto el gobierno nacional hace silencio, da marcha atrás con la expropiación, no cuestiona que no exista ya la intervención ni a un juez que, a ojos vista, es parte de la maniobra de Vicentin.

El 17 de junio se publicó una solicitada con el título “El movimiento sindical y Vicentin”, que expresa “el respaldo a la decisión adoptada por el presidente Alberto Fernández de proceder a la intervención del grupo Vicentin...”. Con la firma de Héctor Daer, Hugo Yasky, Ricardo Peidró, Pablo Micheli, Hugo Moyano, Sergio Palazzo, Sonia Alesso y decenas de dirigentes, tanto la CGT como las CTA se alinearon incondicionalmente con el gobierno. No hay ninguna crítica, ni siquiera una exigencia de

que la expropiación se concrete efectivamente, que alcance a la totalidad del grupo y que no sea meramente un “rescate” donde los capitalistas se salvan a costa de un Estado que se hace cargo de todas las deudas.

A esto se le sumó una campaña de firmas de referentes del “progresismo”, motorizada por el actual director del Banco Nación, Claudio Lozano, y que incluyó, entre otros, a Julio Gambina, Alejandro Bercovich y otros, titulada “Urge multiplicar el apoyo a Vicentin”. Planteada como campaña “contra la derecha”, ni siquiera le exigen al gobierno que avance con la expropiación. Apenas si terminan haciendo un tibio planteo para que Vicentin termine siendo “pública, no estatal, con control social”.

Tanto la solicitada de la burocracia sindical, como el llamamiento del “progresismo” termi-

naron demostrándose absolutamente inservibles. Es que ambos llamaron a confiar en el gobierno, a “fortalecerlo” en su decisión contra una “derecha” que se oponía. Todo este planteo quedó absolutamente en el aire cuando el gobierno terminó retrocediendo, haciendo desaparecer todo atisbo de expropiación y, finalmente, aceptando que ni siquiera hay una intervención a la empresa, sino apenas una desteñida figura de “veedor”.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad fuimos clarísimos desde el primer momento. Nunca depositamos confianza alguna en los dichos del gobierno. Por eso presentamos nuestro propio proyecto de expropiación en el Congreso. Al igual que lo que terminó sucediendo con el impuesto a las grandes riquezas, el doble discurso del gobierno quedó al descubierto. Ese proyecto es, al día de hoy, el único. El del oficialismo nunca existió. Siempre dijimos que había que expropiar Vicentin al ciento por ciento sin indemnización y bajo control de sus trabajadores y los pequeños productores. Ese, sin doble discurso ni medias tintas, será el primer paso para terminar con los negociados de los pulpos exportadores, que solo se completará con la nacionalización del comercio exterior.

Mensaje para Alberto Fernández/“Yo no lo voté para esto presidente”



Escribe **Juan Carlos Giordano**
Diputado electo Izquierda Socialista / FIT Unidad

Esta frase fue dicha la semana pasada por un delegado aeronáutico en el acto que se realizó al finalizar la ruidosa caravana contra el cierre de Austral frente al Aeroparque. “Yo voté a este gobierno pero no para que me quite el convenio colectivo ni desguace la empresa”, señaló. Se refería a la política del titular de Aerolíneas, Pablo Ceriani, puesto por el actual gobierno, que quiere fusionar Austral con Aerolíneas para quitarle conquistas a los trabajadores diciendo que necesita ahorrar, todo con el aval de Mariano Recalde, de La Cámpora, que apoya el ajuste para acabar con las “improductividades”, según dice, amenazando a los sindicatos aeronáuticos.

Otra queja parecida hacia el gobierno se da entre los trabajadores del frigorífico Penta, ya que el patrón que los despidió y no les paga los salarios es el empresario peronista kirchnerista Ricardo Bruzzese, y la policía bonaerense que los reprimió está al mando de Berni-Kicillof. Ahora exigen que se “expropie Penta”, pero el gobierno ya retrocedió con Vicentin mostrando que no quiere avanzar contra estos empresarios inescrupulosos.

Otros trabajadores que votaron a Fernández también empiezan a tener cierta decepción con el gobierno, como por ejemplo los profesionales y trabajadores de la salud, donde sigue cayendo muy mal que el gobierno anuncie “sus logros en salud”, o diga que “los hospitales están preparados” cuando la realidad muestra

lo contrario. Lo mismo ocurre entre los que no van a cobrar el IFE de 10.000 pesos cada dos meses, al mismo tiempo que recuerdan la campaña del peronismo cuando prometía que iba a salvar “a los más vulnerables”. O los jubilados, a quienes les redujeron la mínima. O los centenares de mujeres que luchan por el aborto legal y escuchan al presidente diciendo que no va a presentar el proyecto porque “tiene otras prioridades”.

La gran mayoría de los trabajadores votó a Alberto Fernández y al Frente de Todos para sacarse de encima al ajustador Macri, pero empieza a haber sectores que lo cuestionan y se sienten decepcionados al ver que se niega a avanzar con medidas de fondo para que la crisis no la paguen los trabajadores.

Muchos se interrogan con razón cómo puede ser que el gobierno habló durante meses sobre la necesidad de imponer un impuesto a la riqueza y ahora archivó el tema. ¿Cómo puede ser que anunció la expropiación de Vicentin y después retrocedió? ¿Cómo puede ser que en medio de la pandemia el gobierno sigue mejorando la oferta a los bonistas en 12.000 millones de dólares mientras millones sufren la desocupación, la rebaja salarial y la pobreza?

A todos ellos les decimos que la razón de esto hay que buscarla en que estamos ante un gobierno que enarbola un discurso “progre” o “nacional”, pero aplica otra política, como se empieza a decir, “amaga con la izquierda y pega con la derecha”. Es decir, un doble discurso que hay que desenmascarar. Lo mismo pasó con el gobierno peronista kirchnerista en los doce años donde se beneficiaron la Barrick, Repsol, los bancos y se pagó puntualmente la deuda externa dejando 30% de pobres y 40% de trabajadores en negro bajo el discurso mentiroso de entonces, de que se estaba “redistribuyendo la riqueza”.

Una amplia franja obrera, popular, juvenil y del movimiento de mujeres no ve las soluciones prometidas por el gobierno. Es que para ello hay que imponer medidas de fondo que el Frente de Todos no va a tomar. Alberto Fernández lo justifica diciendo “soy peronista, no socialista”, o que está por un “capitalismo más productivo”. Con eso está señalando que su gobierno va a seguir manteniendo la estructura semicolonial y dependiente del país



al servicio de las ganancias de las multinacionales, los bancos, los grandes empresarios y el FMI. Por eso hace buena letra con ellos mientras no solo no da respuestas al pueblo trabajador, sino que rebaja salarios y jubilaciones y paga el aguinaldo en cuotas.

A esas compañeras y compañeros que están haciendo la experiencia política con el actual gobierno peronista les decimos que desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad vamos a seguir acompañándolos en los reclamos cotidianos postulando en el plano sindical al sindicalismo combativo contra la burocracia sindical de la CGT y las CTA, cómplices de las medidas antiobreras y anti-populares que se están aplicando. Y que para combatir el hambre, la pobreza y la desigualdad social hay que tocar a los de arriba. Ahora en la emergencia, imponiendo un fuerte impuesto a las grandes riquezas para volcar lo recaudado a salud y a las urgencias sociales, entre otras medidas que solo la izquierda postula. Y que para todo ello hay que fortalecer una alternativa política de los trabajadores y la unidad de la izquierda, como lo estamos haciendo con el FIT Unidad, para lo cual los convocamos, para luchar para que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador. Algo que el peronismo del Frente de Todos no va a hacer, como ya lo está demostrando, ante la evidencia de importantes sectores de luchadores que están sacando esa conclusión.

Tucumán: La violencia policial no es accidente

Escribe **Daniel Báez**

La pandemia de Covid-19 agravó la situación que padecen los jóvenes, los trabajadores y los vecinos de los barrios populares y pueblos del interior de nuestra provincia desde hace muchos años. Hoy con la cuarentena las fuerzas de seguridad gozan de más poder y de más impunidad.

La policía de la trata y el narcotráfico tiene impunidad para matar. En Tucumán hay una larga lista de víctimas de gatillo fácil. Solo para recordar las últimas: Facundo Ferreira (12 años), Miguel Reyes Pérez (26), Víctor Robles (17), Ángel Alexis Noguera (23), Luis Espinoza (31). Ahora se suma Walter Nadal (43).

El miércoles 24 al mediodía, dos bicipolicías persiguieron a Walter Ceferino Nadal, de 43 años, sospechoso de un supuesto robo. El policía Jacinto Colodrero, que patrullaba el centro de la ciudad capital, y su compañera, Jéssica Gómez, solicitaron refuerzos. Cuando llegaron a Las Heras, los policías Josué Molina y Melanie Mariel Caliva ya tenían reducido a Nadal, usando la misma técnica de Derek Chauvin y los policías de Minneapolis con la que asesinaron a George Floyd, poniendo la rodilla sobre el cuello de Nadal. “Me falta el aire”, repetía Nadal, el policía le gritaba “no



seas cagón”. El resto de los agentes que acudieron a la escena echaban a los peatones y los amenazaban para que no filmaran. Sin embargo, Ricardo, un testigo presencial, vio todo y contó el hecho. Nadal se quedó callado, no reaccionaba. Fue trasladado al hospital Padilla y murió a los pocos minutos. En el reporte oficial consta “paro cardíaco”, pero la autopsia reveló que habría fallecido por “asfixia”.

Todo esto a dos cuadras de la casa de gobierno. El ministro de (in)Seguridad provincial, Claudio Maley, habló en los medios detallando el “prontuario” de Nadal, sus ocho

lo que le produjo la pérdida de un ojo. Luego intentaron armarle una causa falsa con elementos robados que recolectaron de otras viviendas.

El lunes 29, el Frente de Izquierda Unidad se movilizó a la casa de gobierno provincial para exigir la renuncia del ministro Maley y el juzgamiento de todos los responsables materiales y políticos del asesinato de Walter C. Nadal. Tenemos que seguir haciendo visibles todas estas denuncias y difundir por todos los medios estos hechos de barbarie para reclamar el fin de estos atropellos de las fuerzas de seguridad.

años de cárcel (obviando que hacía ya cuatro años que no registraba ingresos) y mostrándolo como el peor delincuente y adicto. Olvidó comentar las denuncias de la familia por apremios ilegales en la Comisaría 1ra y el hostigamiento permanente de los efectivos de esta seccional sobre Nadal, los mismos que terminaron matándolo.

No es un hecho aislado, es una metodología avalada por el Estado. Los gobiernos de la Nación y la provincia les otorgaron un poder excepcional a las fuerzas represivas en el marco de la pandemia. Esto se ratifica con el caso del joven Ignacio Seijas, de 17 años, cuya casa en Lomas de Zamora fue allanada “por error”, violentaron a su familia y le dispararon a la cara,

Kosteki/Santillán. Los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy

Escribe **Claudio Funes**

Como todos los años, desde aquel 26 de junio de 2002, cuando una feroz represión terminó con la vida de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, en este 18° aniversario se realizó una movilización al puente Pueyrredón exigiendo el juicio y castigo a los responsables políticos de aquella masacre.

Estos aberrantes sucesos se dieron durante el gobierno peronista de Eduardo Duhalde, quien intentó quebrar a sangre y fuego al movimiento piquetero que enfrentaba el hambre y la desocupación.

Los medios de comunicación hegemónicos difundieron entonces que las muertes de Darío y Maxi habían sido producto de un enfrentamiento interno de organizaciones piqueteras.

Entre quienes emitían tamañas mentiras estaban Aníbal Fernández, secretario de la Presidencia, y Juan José Álvarez, secretario de Seguridad de la Nación. Otro que se encargaba de difamar a las organizaciones piqueteras era Felipe Solá, por aquel entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Cuenta Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, que aquel mismo día de la represión llamó a Solá para preguntarle qué estaba sucediendo. El gobernador la atendió y le respondió: “Quédese tranquila Norita, es una pelea entre pobres”.

Pasaron los años. Llegaron los gobiernos peronistas kirchneristas con sus falsas promesas de justicia. La impunidad continuó.

En 2005, ante el reclamo de parte de los familiares para que se abran los archivos de la SIDE, solo les fueron entregados recortes de diarios. Una burla.



Aníbal Fernández continuó con su carrera política. Fue jefe de Gabinete de Ministros entre 2009 y 2011 con Néstor Kirchner y en 2015, durante la presidencia de Cristina Fernández.

Hoy, con un nuevo gobierno peronista, vemos que los responsables políticos de la masacre de Avellaneda continúan impunes. No solo eso, algunos ocupan cargos en el gobierno de Alberto Fernández. Felipe Solá es el actual ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Aníbal Fernández, ex candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el kirchnerismo en 2015, hoy

es el actual interventor de Yacimientos Carboníferos Fiscales.

Izquierda Socialista estuvo presente en el puente Pueyrredón con su militancia encabezada por nuestro compañero Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo. Junto a Alberto y Leo Santillán, padre y hermano de Darío respectivamente, el resto de familiares y demás organizaciones continuamos exigiendo cárcel para los responsables políticos de los asesinatos y hacemos nuestras las palabras de los familiares: “Los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy”.

Docentes: caravana contra el pago en cuotas del aguinaldo

Escribe **Mariana Scayola**
Secretaria General de Ademys

El martes 30, Ademys realizó una caravana de autos en el marco de las acciones que venimos desarrollando a partir del anuncio de un recorte al salario de las y los docentes con la implementación del pago del aguinaldo en cuotas. La caravana salió de Jefatura de Gobierno de CABA pasando por el Congreso donde se sumaron los docentes de AGD y los estatales del Ministerio de Economía finalizando en Palacio Pizzurno.

Ni la lluvia, ni el frío, ni las medidas de restricción en la circulación impidieron que las y los docentes, junto a universitarios y estatales, hiciéramos sentir los bocinazos en defensa de nuestros salarios y contra el aguinaldo en cuotas. Con autos embanderados y carteles en las ventanillas recorrimos la ciudad visibilizando los reclamos de la docencia como conectividad gratuita y equipos para docentes y estudiantes, alimentos de calidad que permitan a las familias mantener una cuarentena sin hambre. Denunciamos la precarización de lxs trabajadores de programas y exigimos que ningún docente quede sin salario.

El pago en cuotas del aguinaldo es una medida impulsada por el gobierno nacional e implementada en CABA por Rodríguez Larreta, al igual que en otras provincias. Representa



un ataque directo al bolsillo de lxs trabajadores en un marco de profundización de las crisis económica.

Frente a esta situación, la burocracia de UTE junto al resto de los sindicatos dejan pasar el ajuste como la CGT y CTA hacen lo propio con el ajuste de Alberto Fernández y los gobernadores en todo el país, sin convocar a la docencia a ninguna acción y rechazando realizar asambleas unitarias para desarrollar un plan lucha para derrotar la política del gobierno

de Larreta de descargar la crisis sobre las espaldas de las y los trabajadores.

Desde Ademys, junto al Plenario Sindical Combativo exigimos la conformación de un fondo de emergencia en base al impuesto a las grandes riquezas, las multinacionales, los bancos y el no pago de la deuda externa que habilitaría los recursos necesarios para salud, educación y salarios.

Paro de docentes universitarios

El viernes 3 de julio, los docentes universitarios y preuniversitarios de todo el país realizaremos una jornada nacional de lucha con apagones virtuales, un paro de veinticuatro horas y acciones de visibilización allí donde sea posible.

La virtualización forzosa ha degradado notablemente nuestras condiciones de trabajo. Muchas veces no tenemos acceso a los campus virtuales ni tenemos horarios de trabajo claros y se nos impide desconectarnos aun fuera del horario de clases.

En cuanto a nuestro salario, se deprecia a paso redoblado en estos últimos meses. A fin de año fuimos excluidos del bono. A días del inicio de la cuarentena sufrimos una rebaja salarial porque no se aplicó la cláusula gatillo que hubiera permitido una recomposición



parcial de nuestro salario. Ahora se suma que no hay anuncio alguno para la reapertura de una paritaria salarial, mientras el gobierno decreta el pago fraccionado del medio aguinaldo

para una importante cantidad de docentes universitarios y preuniversitarios.

Exigimos el pago íntegro del medio aguinaldo, no al pago fraccionado, la reapertura urgente de la paritaria salarial y un aumento de 40 por ciento. Decimos no a la precarización laboral. Reclamamos la prórroga por doce meses de las becas UBACyT, el respeto de las condiciones laborales y el convenio colectivo de trabajo mientras dure la modalidad virtual, el pago de los gastos que los docentes tenemos por la virtualización, la provisión de equipos para todos los docentes, suplencias pagas para cubrir licencias y dispensas y el aumento inmediato del presupuesto universitario.

Corresponsal

Nueva movilización de aeronáuticos el 6 de julio

Escribe **Claudio Funes**

El cuerpo de delegados de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) llamó a concentrar nuevamente frente al Aeroparque Jorge Newbery el próximo 6 de julio.

Para ese mismo día fue convocada la asamblea general extraordinaria de accionistas de Austral, donde se discutirá la fusión con Aerolíneas Argentinas.

El gobierno de Alberto Fernández tomó esa decisión y Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas, es su brazo ejecutor. El plan de fusionar ambas empresas viene desde la "reestatización" de la línea de bandera y terminó de delinearse en Olivos el pasado 14 de abril.

Esta fusión intentará imponer flexibilización y despidos a los trabajadores. El mismo Ceriani manifestó que deberá hablar con los sindicatos para revisar las cláusulas de los convenios que "quedaron obsoletas e impiden tener una operación eficiente".

La fusión de hoy será desguace mañana

El plan del gobierno del Frente de Todos es la posterior escisión de la "nueva Aerolíneas Argentinas" en tres unidades de negocio diferentes. La primera sería mantener una línea aérea bajo la modalidad low cost.

La segunda propone separar gran parte del área de mantenimiento para crear una unidad de negocios de Aerolíneas Unidad Mantenimiento que, según palabras de Ceriani, "requerirá reordenar la fuerza laboral disponible".

La tercera, una unidad de negocios de carga. En Aerolíneas Unidad Cargas nuevamente, según Ceriani, "tendremos que acordar condiciones laborales acordes a las actividades de la carga aérea, con características distintas a las operaciones de pasajeros", es decir sin personal de tráfico y sin tripulantes de cabina.

Alberto Fernández y Ceriani quieren concretar el viejo plan que intentaron imponer American Airlines, Marsans y el gobierno macrista, de la mano de Guillermo Dietrich.

El ajuste que se quiere descargar sobre las espaldas de los



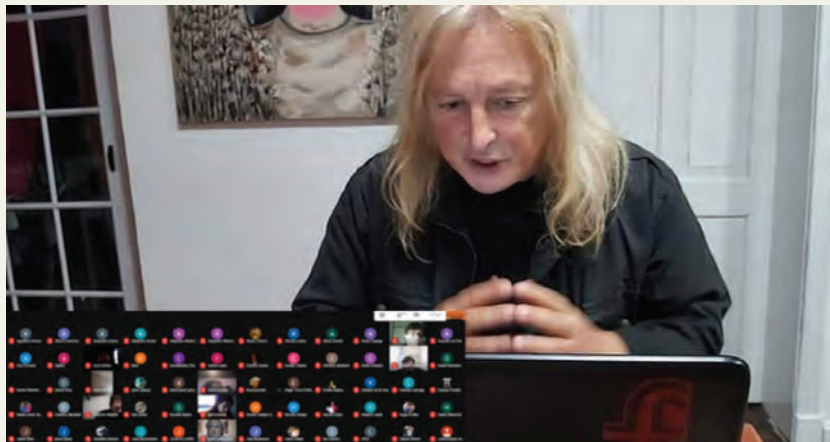
aeronáuticos está al servicio del pago de una deuda externa de la que los trabajadores no somos responsables.

Desde Izquierda Socialista nos solidarizamos con la lucha de los trabajadores de APTA y reclamamos Aerolíneas Argentinas y Austral ciento por ciento estatales y controladas por sus trabajadores.

Primera reunión con referentes de la UTA contra Fernández, y la falsa oposición de Bustinduy

Escribe **Pedro Rodríguez**, referente de la oposición en UTA

El martes 30 de junio se realizó la primera reunión con choferes de la UTA junto a Rubén "Pollo" Sobrero. Participaron referentes, delegados y activistas de distintas líneas de Buenos Aires y del interior del país que se vienen organizando en defensa del salario, los puestos de trabajo y demás derechos pisoteados. En un gremio cruzado por una rebelión nacional en medio de una pandemia donde todos los choferes viven expuestos. Desde abajo crecen la bronca y la pelea contra los empresarios que se roban los subsidios, no pagan los sueldos en tiempo y forma, despiden, cierran empresas y persiguen activistas. Y en esa rebelión también crece la bronca contra la burocracia sindical, donde la conducción nacional de la UTA se encuentra dividida entre el actual secretario general, Roberto Fernández, y su antiguo secretario gremial Miguel Bustinduy, que hoy posa de opositor, pero responde directamente a la patronal del



Grupo DOTA. En las distintas intervenciones en la reunión con el Pollo fue quedando claro que los dos sectores, tanto de Fernández como de Bustinduy, actúan con patotas, persiguiendo a los activistas y responden a los empresarios y no a los trabajadores.

Por eso va surgiendo un tercer espacio formado por

activistas y nuevos delegados junto a cientos de compañeros que salen por primera vez a dar la pelea. Impulsan los reclamos, organizan asambleas y salen a luchar, a veces autoconvocados, otras apretando a los dirigentes. En ese sector nos apoyamos desde el sindicalismo combativo para empezar a dar pasos en la construcción de una dirección alternativa. Una dirección que defienda el convenio, la estabilidad laboral y el salario de los compañeros. En la reunión se resaltó la necesidad de avanzar en este sentido y organizar la recuperación de los cuerpos de delegados, que en muchos casos está planteada. Otra sería la realidad de los choferes si estos luchadores fueran los dirigentes del gremio. Más allá de los ritmos de esta gran tarea todo empieza por el primer paso. El ajuste aprieta y la bronca crece, por eso el proceso de las luchas que vienen marcando al gremio se va a profundizar, y al calor de estas luchas se seguirán fogueando los cientos de activistas que recorren el país. Se acordó una segunda reunión para dentro de quince días, invitando a otras líneas y para profundizar la organización

NOTICIERO SINDICAL

Mendoza. Salvaje represión a trabajadores estatales

Desde hace veinte días la policía viene reprimiendo salvajemente a los trabajadores municipales de la capital provincial. Así responde el intendente Ulpiano Suárez, sobrino del gobernador Rodolfo Suárez, a los reclamos de mejora salarial.

En medio de la crisis sanitaria desatada por el coronavirus, los municipales son considerados trabajadores esenciales, pero están haciendo retención de servicio en sus puestos de trabajo porque no pueden llevar un plato de comida a sus hogares. Cobran salarios de 10.300 pesos.

A los pocos días de iniciadas las medidas de fuerza la policía empezó a reprimir la protesta de manera brutal. "Un sábado a las 8 y media de la noche estábamos con los compañeros en la municipalidad, con los portones abiertos, sin tomar el edificio y sin infringir ninguna norma, hasta que vino la policía por el portón de atrás. Nos sorprendió todo el pelotón de infantería que se puso a los costados y empezaron a tirarle gases a las compañeras y quemarlas entre las piernas", relató Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza.

Desde Izquierda Socialista nos solidarizamos con los trabajadores municipales y denunciarnos la responsabilidad de los gobiernos municipal y provincial del Frente Cambia Mendoza por la salvaje represión.

La Plata. Se movilizan comunidades migrantes

Hoy miércoles 1° de julio la Coordinadora Migrante realiza una olla popular frente a la gobernación provincial en La Plata. De la coordinadora participan representantes de las comunidades peruana, boliviana, paraguaya, senegalesa y otras. Le están exigiendo al gobierno respuestas ante la falta de comida y el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia. También denuncian la represión que vienen sufriendo quienes se ven obligados a salir a trabajar. Ese fue el caso del migrante senegalés Mbacke Ndaw, quien fue golpeado y detenido por la policía local mientras vendía en la calle. Desde Izquierda Socialista acompañamos la lucha migrante y sus reclamos.

Contagios en el Estado nacional

En las últimas semanas en varias dependencias estatales aparecieron casos de coronavirus, lo que dejó al desnudo el



desinterés de las autoridades por la salud de los trabajadores.

En el Ministerio de Economía a mediados de mayo apareció el segundo caso de Covid-19. Pese a los reclamos de la junta interna de ATE las autoridades nunca brindaron información detallada sobre la manera de actuar para prevenir la propagación del virus entre los compañeros que están desarrollando tareas esenciales. Tampoco les realizaron los testeos a aquellos compañeros que estuvieron en contacto estrecho con la compañera. Así fue que, días después, al concurrir por otra dolencia a un centro de salud, un compañero fue diagnosticado Covid positivo.

La misma situación se vivió en el Centro de Atención Telefónica de la Anses, donde ya hay cinco compañeros contagiados. Las autoridades no solo se negaron a realizar los testeos de todos los trabajadores con contacto estrecho, sino que apenas accedieron a dar catorce días de aislamiento luego de confirmado el tercer caso y ante una medida de fuerza impuesta por los gremios.

Neuquén. Un paso adelante de los camioneros

Más de un mes acampando llevan los doce trabajadores de Expreso Argentino frente al depósito para impedir que el empresario se lleve la mercadería y los vehículos que están en el predio, cuando aún les debe tres meses de salario y les impide ocupar sus puestos de trabajo. Los empresarios estafadores continúan vaciando la empresa, emplean a otros trabajadores en negro y usan un depósito de la ciudad de Cipolletti para cargar mercadería. Ante estos hechos, las abogadas de los trabajadores presentaron una medida cautelar ante la Justicia laboral exigiendo que se obligue a los empresarios a pagar los sueldos y se les embarguen sus bienes. El juez de la causa

falló a favor, por lo tanto ahora hay que exigir que la empresa cumpla con lo fijado judicialmente. Este es un paso adelante que nos hace redoblar el apoyo a los camioneros para que puedan seguir con su lucha por cobrar sus sueldos y mantener la continuidad laboral. Desde Izquierda Socialista cotidianamente acompañamos el acampe y aportamos para que no les falten provisiones y sean parte de las acciones y movilizaciones unitarias que se llevan adelante por los distintos reclamos en Neuquén, impulsados desde la Multisectorial y el Sindicalismo Combativo.

No al remate de Cerámica Neuquén

Cerámica Neuquén es una de las tres fábricas auto gestionadas por los trabajadores desde hace varios años. Autogestión y control obrero que fue iniciado ante el abandono que hizo el ex patrón de la planta de cerámicos, siendo que contaba con maquinarias en buenas condiciones de producir. En esta última semana hubo novedades importantes ya que un juez determinó habilitar el remate de la planta para que un grupo de ex-obreros puedan cobrar la indemnización que les adeuda la vieja patronal. Lo grave es que el juez, en vez de rematar los bienes personales del patrón que contrajo la deuda, lo que hace es ir directamente contra los bienes que están en la fábrica, por lo tanto contra la gestión obrera. Esta maniobra es monitoreada por el Sr. Brollo, ex vicegobernador de Sobisch. La amenaza de desalojo es inminente, porque al intentar tasar la fábrica para su venta, se terminará con la fuente de trabajo de los 100 operarios actuales.

En una numerosa Multisectorial, de la que fuimos parte, realizada en la planta, se resolvieron varias acciones para evitar el remate: en primer lugar no se permitirá el ingreso del oficial tasador; también se realizarán una serie de actividades ya votadas por los obreros, como una permanencia frente al juzgado exigiendo al juez que desista del remate; una gran caravana para denunciar la situación a la que fueron invitados por las conducciones opositoras de Aten, unificando los distintos reclamos que están en curso en la provincia, entre ellos la de los camioneros de Expreso Argentino. También se lanzará una campaña nacional en defensa de Cerámica Neuquén bajo control obrero como parte del ataque que sufren la cerámica Zanón y Cerámica Stefani y las distintas gestiones obreras del país, prácticamente ahogadas por los distintos gobiernos nacionales y provinciales. Nos sumamos activamente en esta campaña porque defendemos las fuentes de trabajo de trabajadores que vienen gestionando fábricas, y en Neuquén especialmente las tres cerámicas.

A seis meses de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, seguimos sin respuestas

Escribe **Mercedes Trimarchi**, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista, FIT-Unidad

Las mujeres, lesbianas, travestis, trans e identidades no binarias sufrimos todo tipo de maltrato y discriminación. Durante el aislamiento preventivo y obligatorio que rige en nuestro país desde el 20 de marzo la violencia de género aumentó. Tanto es así que las llamadas a la línea 144 que atiende las denuncias aumentaron casi 40%, según lo reconoció Elizabeth Gómez Alcorta, responsable del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La ONU ya había recomendado a los distintos mandatarios que tomen medidas especiales para contener y acompañar a las víctimas durante la pandemia, ya que en contextos de aislamiento y encierro la violencia recrudece.

En la Argentina las cifras de femicidios y transtravesticidios se mantienen altas. Desde el 20 de marzo hasta el 12 de junio, según el Observatorio de la Casa del Encuentro se registraron sesenta y siete femicidios. De hecho, durante la cuarentena bajaron todos los delitos menos la violencia de género. Pese a esto, el ministerio no ha tenido una política pública que revierta esta situación. A seis meses de la asunción del gobierno peronista de Alberto Fernández y con una situación de emergencia sanitaria y social sin precedentes, las mujeres, lesbianas, travestis, trans e identidades no binarias continuamos sin respuestas.

Un informe publicado el 24 de junio en el portal lavaca.

org revela que solamente se ejecutó 26,48% del presupuesto asignado para ese ministerio. Es sorprendente, ya que a esta altura del año debería acercarse al 50%, más si se tiene en cuenta que el presupuesto total es miserable e insuficiente y por el aumento de la violencia machista. El riesgo de la subejecución del presupuesto reside en que se reasignen partidas de dinero que no se usaron a otros sectores. Así lo plantea la normativa vigente, trimestralmente se deben rendir cuentas sobre lo que se gastó y, en el caso de que no se haya gastado todo lo asignado para ese período, el Poder Ejecutivo puede destinar las partidas no utilizadas a otros sectores. De concretarse, es sumamente peligroso, ya que reduciría aún más el escaso presupuesto.

Desde Isadora e Izquierda Socialista en el FIT-Unidad hacemos un llamado de atención frente a esta subejecución. Pero sobre todo decimos que es inadmisibles que se destinen solo \$11 por mujer por año para combatir la violencia de género, lo mismo que ya había designado Macri en 2019. Contar con un presupuesto acorde para atender esta problemática, que es de vida o muerte para las mujeres e identidades no hegemónicas, es fundamental. Exigimos aumento del presupuesto para construir nuevos refugios y acondicionar los que ya existen, junto con una política integral



de atención a las víctimas. Exigimos acompañamiento psicológico con perspectiva de género y patrocinio legal gratuito, una vivienda para quienes se vean obligadas a irse de la casa en la que se encuentra el violento y un subsidio económico que cubra la canasta básica. Estas medidas son urgentes. Necesitamos que se declare la emergencia en violencia de género con un presupuesto acorde, a partir del no pago de la deuda externa, la quita de subsidios a la Iglesia Católica y un impuesto a las grandes riquezas para que la crisis no la paguemos las mujeres trabajadoras y los sectores populares

Córdoba: basta de trata, investigación y protección para Nora

Escribe **Noelia Agüero**, legisladora provincial electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El 3 de junio de 2020 la familia de “Nora” (nombre ficticio utilizado para resguardar su privacidad) realiza una denuncia por trata de persona en la Justicia federal. Luego de meses en los que Nora fue coaccionada, manipulada y violentada por un sujeto, miembro del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, que le enviaba fotos incitándola al consumo de drogas, la maltrataba, mientras amenazaba a ella y a su familia, y la llevaba a fiestas de empresarios y funcionarios donde la dejaba para que tenga relaciones con sus amigos. En los allanamientos realizados a los acusados no se siguió el protocolo adecuado y se cometieron incontables irregularidades, en las que “se perdieron” pruebas clave para la investigación. Tanto la Justicia provincial como la nacional buscan desentenderse de la causa.

Sabemos que la trata es uno de los negocios ilegales más rentables a nivel mundial, compitiendo solo con el narcotráfico y la venta de armas. Negociado que se sostiene gracias a la enorme complicidad y connivencia entre la Justicia, la policía, los funcionarios públicos y las redes de narcotráfico. Esto hace

que el número de tratantes sentenciados y arrestados sea el más bajo. De más está decir el miedo que genera esta situación para las familias y las víctimas, que lleva a que muchas veces los delitos no sean denunciados.

A partir de las grandes movilizaciones por el caso de Marita Verón, en 2012 se sancionó la ley 26.842, la nueva ley sobre la trata de personas, a partir de la cual fueron rescatadas miles de mujeres por los cientos de llamadas diarias a la línea 145. Sin embargo, detrás de estos números se esconde que ninguna red de trata fue desmantelada y que el presupuesto destinado para combatir las violencias y la trata es vergonzoso.

La organización y la rápida respuesta del movimiento feminista acompañando a la familia es la única manera en la que podemos presionar a la Justicia para que Nora cuente con todas las medidas de resguardo y protección necesarias y vayan a prisión los culpables. Tal como lo venimos haciendo desde Isadora e Izquierda Socialista, junto a la Asamblea NiUnaMenos Córdoba, al lado de los familiares y amigos de Nora, asesorando y poniendo todas nuestras herramientas al servicio de conseguir justicia.



Seguiremos organizadas por las compañeras que tenemos que cuidar y por las que desaparecieron y deben aparecer con vida.

- Desmantelamiento de las redes de trata. Aparición inmediata de todas las víctimas de trata.
- Plata para las mujeres, no para la deuda. Protección urgente para Nora.
- ¡Investigación y justicia ya

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO

Una ley a la medida del sionismo y el estado de Israel

Escribe **Laura Marrone**, legisladora porteña (m.c.) Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Una ley que nos llena de vergüenza acaba de votarse en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bajo un texto amañado y tramposo, el 18 de junio la Legislatura porteña, con la casi totalidad de sus miembros, se sumó al acuerdo firmado por el presidente Fernández y la Embajada de Israel pocos días antes. El mismo adopta la definición de antisemitismo a todo acto que se realice contra judíos o instituciones judías, según la nueva definición adoptada por la Alianza Internacional para la Rememoración del Holocausto (IHRA). De esta manera, si alguien critica al gobierno de Israel estaría cometiendo un delito de antisemitismo, o si repudia la agresión del Estado de Israel contra el pueblo palestino estaría siendo “antisemita”.

La nueva definición ahora votada en la Legislatura de Buenos Aires busca confundir a quienes honestamente son solidarios con el pueblo judío contra el holocausto y la persecución que sufrieron



a lo largo de la historia. Desmontemos la trampa. Antisemita no es igual a antisionista. Condenar al Estado de Israel es ser antisionista, porque el sionismo es el movimiento político que avala la represión, persecución y expropiación de las tierras del pueblo

palestino. Pero desde ningún concepto es ser antisemita. Además, el término es equivocado ya que semitas son muchos pueblos de Medio Oriente, no solo judíos, y muchos judíos no son semitas. Los antisionistas estamos a favor de la creación de un nuevo Estado laico, no racista, democrático, donde palestinos y judíos indistintamente semitas muchos de ellos vivan con igualdad de derechos, como existía antes de 1948, cuando las potencias imperialistas enclavaron el Estado de Israel en las tierras palestinas.

Tanto nuestra organización nacional, Izquierda Socialista, como la corriente internacional a la que adherimos, la Unión Internacional de Trabajadores y Trabajadoras – Cuarta Internacional (UIT-CI), tenemos una larga y consecuente trayectoria de repudio y combate a toda expresión o ataque racista contra el pueblo judío o cualquier otro. Pero aquí se trata de algo muy distinto, un engaño que debe ser aclarado y repudiado.

Esta ley surge porque la IHRA, alianza conformada por gobiernos de treinta y cuatro países, promueve equiparar la

Una ley a la medida del sionismo y el estado de Israel

definición de antisemitismo con el antisionismo. Así, quien se atreva a cuestionar la criminal y genocida política anexionista que Israel está llevando a cabo en estos momentos contra el pueblo palestino de Gaza y Cisjordania sería antisemita, dado que Israel se declara judío. A través de estas acciones de la IHRA Israel busca cerrar filas de la gran mayoría de los gobiernos en apoyo al Acuerdo del Siglo que firmaron el presidente israelí Benjamin Netanyahu y el presidente Donald Trump en enero de este año. Dicho pacto otorga a Israel el derecho a seguir anexionando tierras palestinas.

Entre otros puntos, el acuerdo reconoce la soberanía sionista sobre los asentamientos de colonos en Cisjordania, que Jerusalén sea la capital de la entidad sionista y la anexión del valle del río Jordán. Plantea la expulsión de 300.000 palestinos de ciudadanía israelí hacia el pseudo Estado palestino, mientras que le niega el derecho al retorno a seis millones de refugiados palestinos, que en virtud del acuerdo dejarían de ser considerados refugiados. Se les negaría el derecho a recuperar sus propiedades robadas durante el proceso de colonización, o a obtener cualquier compensación económica. A cambio, se reconocería un pseudo Estado palestino a semejanza de los guetos o bantustanes del apartheid sudafricano, sin control de sus fronteras o de su espacio aéreo y marítimo. “Desmilitarizado” en el sentido de que se prohíbe a los palestinos armarse para defenderse de los ataques sionistas. Se le cederían a ese pseudo Estado dos franjas de tierra en el desierto y Gaza se mantendría sitiada. Se considera violatorio del acuerdo el apoyo a cualquier iniciativa de reivindicación nacional y antirracista como el movimiento antisionista de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).

Esta aberrante propuesta es la continuidad de la agresiva política imperialista y racista de Trump en relación con el tema palestino. En los últimos tres años el gobierno yanqui ha avalado la ocupación ilegal por parte de las fuerzas sionistas de los Altos del Golán sirios y reconocido a Jerusalén como capital israelí, anunciando que instalará la embajada yanqui en esa ciudad. Cerró

la misión diplomática palestina en Washington y eliminó la ayuda humanitaria y el apoyo a la agencia de refugiados de la ONU en Palestina. En diciembre de 2019 firmó una orden ejecutiva contra el movimiento BDS para criminalizar las críticas a Israel y equipararlas con antisemitismo.

Respecto de la votación favorable en la Legislatura del macrista Juntos por el Cambio y el peronista Frente de Todos, es inadmisibles que tres legisladores que están cumpliendo ahora el mandato del FIT en la Legislatura porteña hayan votado a favor de esta aberración. Rechazamos la votación de Gabriel Solano (PO), Myriam Bregman y Alejandrina Barry (PTS) y los llamamos a retirar inmediata y públicamente su apoyo, acompañando el correcto voto contrario de la diputada de AyL

Marta Martínez y la posición de Izquierda Socialista, consecuente con todo lo que el FIT ha planteado contra el genocida Estado de Israel y la persecución del pueblo palestino todos estos años, con declaraciones, marchas y actos acompañando el repudio que promueve el pueblo de Palestina.

Desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad siempre nos hemos opuesto a estas iniciativas que buscan legitimar al Estado genocida de Israel. Además somos impulsores del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo de Palestina.

Convocamos a todas las organizaciones de derechos humanos, sindicatos, movimiento de mujeres y centros de estudiantes a pronunciarse contra el acuerdo de Trump y Netanyahu, así como contra esta ley y el acuerdo firmado por el gobierno nacional.

Una rectificación necesaria

Escribe **Gabriel Schwerdt**

Como hicimos público en la declaración de nuestra compañera Laura Marrone, repudiamos la aprobación en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por la cual se adhiere a la definición de antisemitismo impulsada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). A su vez, criticamos y exigimos una rectificación de la votación afirmativa de los legisladores del FIT-Unidad que en este momento están ocupando las bancas que pertenecen a PTS y PO. Por eso saludamos la rectificación que hicieron públicamente, es un paso positivo porque el error fue grave. Y es necesaria porque fueron muchos los activistas de la causa palestina que nos pidieron explicaciones por la equivocada votación. La rectificación también aclara las posiciones, porque cuando se comenzó a hacer pública la votación, el dirigente del PTS Manolo Romano, en su face-

book, reivindicó la votación afirmativa de los legisladores ante la crítica de AyL.

Lo ocurrido también es un alerta para no caer en las trampas del parlamento burgués, que permanentemente mete paquetes de leyes entre gallos y medianoche, como sucedió en este caso, para hacer aprobar aquellas que van en contra de los trabajadores y el pueblo. Los revolucionarios no podemos caer en esas maniobras.

A la vez que marcamos estos errores, nos pronunciamos clara y enérgicamente contra el ataque de la OSA (Organización Sionista Argentina), que declaró públicamente que iniciará acciones legales contra los tres legisladores por la rectificación pública. En su momento, nuestra compañera Laura Marrone también recibió ataques de las organizaciones sionistas por defender la causa palestina. Pero no nos harán callar, ni ceder un centímetro, en nuestra lucha por defender los derechos del pueblo palestino atropellados por el Estado sionista de Israel.

FECHAS

A 75 años de la fundación de las Naciones Unidas

Escribe **Silvia Santos**

El 26 de junio de 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, fue firmada la carta de fundación de las Naciones Unidas, en cuyo preámbulo declara “reafirmar los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor del ser humano, en la igualdad de derechos de los hombres y las mujeres” [...] y “promover el progreso social y mejores condiciones de vida dentro de una amplia libertad”. Lamentablemente, la realidad es que tras sus frases de “defensora de la paz, la democracia y los derechos humanos”, esta institución mundial localizada en Nueva York se ha dedicado esencialmente a avalar, por acción u omisión, crímenes de guerra, golpes de Estado, abusos y restricciones a las libertades democráticas por parte de los gobiernos burgueses, genocidios y atrocidades que sirven a los intereses de Washington y sus aliados.

¿Fracasó la ONU?

Esta contradicción entre su declaración de principios y sus acciones concretas no puede analizarse como un fracaso. Tras sus altisonantes frases, la ONU tuvo su origen en una serie de pactos y acuerdos entre los gobiernos, en primer lugar de los países imperialistas, con el aval de la burocracia de la URSS, para controlar, evitar o derrotar nuevos procesos revolucionarios. Recordemos que Hitler fue vencido por el heroico pueblo soviético, lo que le dio un impulso y prestigio a la burocracia estalinista a los ojos del mundo. No es casual que uno de los encuentros para discutir la “paz” de posguerra fue realizado en febrero de 1945 en Yalta (Crimea). En ese momento Josef Stalin, Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill resolvieron, entre otros “detalles”, el reparto de Europa, quedando el sector oriental comandado por la URSS, y el occidental bajo el capitalismo. Y Alemania se dividió entre los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la URSS. Así comenzaba a transitarse el camino rumbo a lo que unos meses después fue la ONU, un proyecto defendido por el presidente yanqui.

Por eso, más allá de las “buenas intenciones” expresadas en su carta, la ONU sirvió y sirve a los propósitos del imperialismo y de las multinacionales y le fue extremadamente útil a la burocracia estalinista para mantener su statu quo. Basta ver cómo actuó y actúa la ONU frente a la lucha de los pueblos del mundo

por su liberación, por sus derechos o por su autodeterminación. Podríamos enumerar cientos o miles de casos que demuestran la posición nefasta de la organización, como en el levantamiento popular y la posterior guerra civil siria, frente a la guerra imperialista en Irak o Afganistán, o a las sangrientas dictaduras latinoamericanas, que todos conocemos. Como no podemos detenernos en cada uno, vamos a tomar tres ejemplos para analizar esa conducta.

La creación del Estado sionista de Israel y sus consecuencias. La posición adoptada en la guerra de Malvinas. Y, por último, el levantamiento antirracista acontecido recientemente en los Estados Unidos. Estos casos muestran a quién sirve la ONU.

Creación del Estado de Israel

El 14 de mayo de 1948, en medio de violentos ataques israelíes apoyados por el ejército británico a aldeas palestinas, que costaron miles de vidas, las Naciones Unidas proclamaron la creación del Estado de Israel. Esta medida, rechazada por los pueblos árabes, fue apoyada por las mayores potencias del planeta, incluida la URSS de Stalin, e inauguró una verdadera tragedia de sangre y terror contra el pueblo palestino, que dura hasta nuestros días. Con el mito de “una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra” justificaron la ocupación violenta de un territorio que tenía dueños, los palestinos. Para consolidar su ocupación, Israel impuso un estado de terror expulsando casi un millón de palestinos, destruyendo sus aldeas y expropiando sus bienes.

Envalentonado con ese “aval” de la ONU para imponer su brutal ocupación, el Estado de Israel, convertido en un enclave de los Estados Unidos después de la retirada británica, nunca cumplió con las resoluciones de la ONU que simulaban sancionarlo. La resolución 242, adoptada por unanimidad en el Consejo de Seguridad el 22 de noviembre de 1967, seis meses después de la Guerra de los Seis Días, “exige la instauración de una paz justa y perdurable en Oriente Medio”[...] “la retirada



del ejército israelí de territorios ocupados durante el conflicto” y el reconocimiento por parte del pueblo palestino al derecho de los israelíes a tener su “Estado”. Nunca se cumplió y tampoco el sionismo recibió sanciones.

Lejos de respetar las resoluciones, Israel continuó avanzando sobre los menguados territorios palestinos. Asentó judíos en territorios ocupados, lo que en diciembre de 2019 generó una nueva resolución de la ONU llamando a Israel a poner fin a su política de construir asentamientos. Israel jamás acató la medida y la ONU continuó mirando para otro lado. Podríamos seguir relatando innumerables violaciones contra el pueblo palestino, que ha perdido todos sus derechos en su propia tierra. Israel ha impuesto un verdadero estado de ocupación con un régimen racista de apartheid violando los principios de la entidad mundial, sin embargo la ONU nunca avanzó más allá de resoluciones burocráticas.

1982, Guerra de Malvinas

El 3 de abril de 1982 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 502, que exigía el cese inmediato de las hostilidades a las partes implicadas en el conflicto de las Malvinas, al considerar que existía un quebrantamiento de la paz en la región. Quien había “quebrantado la paz” para defender su derecho sobre las islas Malvinas era la Argentina. La resolución demandaba además la retirada inmediata de todas

A 75 años de la fundación de las Naciones Unidas

las fuerzas argentinas de las islas. Finalmente exhortaba tanto a la Argentina como al Reino Unido a que busquen una solución diplomática al conflicto respetando lo dispuesto por la Carta de las Naciones Unidas. O sea, la ONU colocó en pie de igualdad y le impuso las mismas exigencias al colonizador y al país que defendía su territorio.

Tradicionalmente, en el marxismo hemos defendido el fin del proceso colonial, como el control británico sobre el norte de Irlanda, o en enclaves como Gibraltar, Ceuta, Melilla o Malvinas. En todos los casos, como en la guerra de Malvinas, planteamos el fin del vestigio colonial con el retorno de esos territorios a sus legítimos dueños. Los enclaves son estados artificiales creados por el imperialismo con una población que no es originaria de esos lugares. Por ejemplo, si en Malvinas se hiciera una consulta con base en el derecho a la autodeterminación, seguramente la absoluta mayoría de la población defendería ser parte del Reino Unido, pues ese es su origen. Pero la ONU no reconoce la existencia de enclaves. De esa manera, mientras Inglaterra lanzaba todo su poder bélico contra la Argentina con el apoyo del imperialismo yanqui, que detectaba los blancos a ser bombardeados, de forma hipócrita la ONU llamaba a resolver de forma pacífica el conflicto.

La ONU y el racismo

Frente al asesinato por parte de tres policías blancos de George Floyd, un trabajador afroamericano en el estado de Massachusetts, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

convocó a una reunión extraordinaria para tratar el tema. En la ocasión, un grupo de países africanos, con el apoyo del hermano de Floyd, presentó una propuesta para ayudar en la lucha contra el racismo. La iniciativa pedía que la ONU cree una comisión investigadora para indagar los crímenes cometidos en los Estados Unidos y en otros países que viven la misma situación.

Preocupado con una resolución como esa, que podía afectarlo, el representante del gobierno racista y genocida de Brasil salió en defensa del presidente yanqui Donald Trump (que ni siquiera asistió a la reunión) alertando que no se podía singularizar en un único país el tratamiento sobre el racismo. Obviamente, los países imperialistas rechazaron la propuesta con el mismo argumento, no existían motivos para singularizar apenas en un país y una "eventual" resolución debería versar apenas sobre generalidades. Una omisión inconcebible, siendo que en el año 1969, en las Naciones Unidas entró en vigor la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Finalmente, se acordó una resolución "adoptada por consenso de manera oral y sin votar", que también hace referencia a las muertes de otras personas de ascendencia africana y repudió el racismo estructural del sistema de justicia penal. Un verdadero saludo a la bandera mientras la sangre del pueblo negro continúa corriendo impunemente.

Aunque termina rechazando los recientes incidentes y el uso excesivo de la fuerza y de otras violaciones de los derechos humanos por parte de los oficiales de las fuerzas públicas contra los manifestantes, no fue capaz de aprobar una resolución concreta

para investigar la actuación de las fuerzas represivas yanquis para, en caso de violaciones, determinar las correspondientes sanciones, como se hace en muchos países dependientes cuando el imperialismo los quiere presionar. En la propuesta oral votada se solicita al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que elabore un informe sobre el racismo sistemático y las violaciones de las leyes internacionales de derechos humanos contra los africanos y afroamericanos por parte de las fuerzas del orden y de otras personas de ese grupo de población. No es casual que, días después de los incidentes en las marchas que repudiaron el asesinato de George Floyd, otros negros hayan sido asesinados por las fuerzas policiales en los Estados Unidos.

En definitiva, en sus 75 años de historia la ONU ha sido fiel al verdadero propósito de sus creadores, construir un organismo mundial, como lo fue su predecesora, la Liga de las Naciones, para controlar el mundo al servicio de las grandes potencias y sus intereses económicos. Es lo que ha venido haciendo desde su fundación, aunque para eso haya tenido que omitir genocidios, violaciones a la autodeterminación de los pueblos y de los derechos humanos, de las prácticas racistas o la destrucción del medio ambiente. Con sobrada razón la pequeña Greta Thunberg, activista ambientalista de solo 16 años, durante la Cumbre sobre la Acción Climática de la ONU les gritó en la cara: "La gente está sufriendo, la gente está muriendo. Ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el inicio de una extinción masiva y lo único de lo que ustedes pueden hablar es de dinero".

INTERNACIONAL

Brasil: no a la persecución de la empresa municipal de Río de Janeiro Comlurb

Campaña de solidaridad con el trabajador y dirigente sindical Bruno da Rosa

Recientemente, la difusión de un video con el discurso del barrendero Bruno da Rosa, miembro de la Comisión Interna para la Prevención de Accidentes en su lugar de trabajo, tuvo enormes repercusiones en la categoría, en las redes sociales y en la prensa.

El resultado fue que el compañero Bruno da Rosa fue suspendido por cinco días, precisamente porque dijo la verdad sobre las condiciones de la categoría y exigió medidas para proteger la vida de los barrenderos, como equipos de protección individual adecuados, pruebas para detectar el virus y un protocolo de alejamiento del trabajo para aquellos que muestran síntomas parecidos a la gripe. Desde que lideró la huelga de la categoría en 2014, Bruno ha sido perseguido con transferencias e incluso fue despedido arbitrariamente y reincorporado después de un año de mucha lucha.

Durante la pandemia, y después de que surgieron las quejas espontáneas de los barrenderos, se proporcionó la cantidad mínima de agua, jabón y alcohol en gel en los locales de trabajo. Con el aumento de los reclamos y la muerte por Covid-19 de un anciano barrendero que todavía estaba trabajando, la Compañía Municipal de Limpieza Urbana (Comlurb) tuvo que cumplir, en parte, las exigencias de la categoría.

Al mismo tiempo que cedió a algunos reclamos, Comlurb castigó a cada trabajador que expuso los problemas, siempre afirmando que se trataba de mentiras, aunque estuvieron disponibles muchas pruebas, videos, fotos y artículos en la prensa que mostraban la situación real de los barrenderos en la calle en plena pandemia.

En las últimas semanas Comlurb eliminó las escalas de turnos rotativos durante la pandemia, además de congelar los salarios y suspender las vacaciones hasta fin de año, coincidiendo con la política de la municipalidad de facilitar todas las medidas de aislamiento social y aplicar ajustes contra empleados del municipio. Al mismo tiempo, los trabajadores de la recolección, esenciales para la limpieza de la ciudad, son acosados.

En lugar de castigar a quienes demandan reivindicacio-



nes, el presidente de Comlurb debería convocar una reunión con representantes de los trabajadores para conocer sus reclamos y valorar esta categoría.

Por estas razones nos solidarizamos con todos los compañeros perseguidos por defender sus derechos en Comlurb y exigimos a la gerencia de la empresa y a la ciudad de Río de Janeiro el retiro inmediato del castigo arbitrario dado al barrendero Bruno da Rosa.

Argentina: Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FITU; Nicolás del Caño, diputado Nacional PTS/FITU; Romina Del Pla, diputada nacional PO/FITU; Alejandro Bodart, legislador (MC) MST/FITU; Rubén "Pollo" Sobrero, secretario general Unión Ferroviaria Seccional Oeste; Mónica Schlotthauer, delegada ferroviaria y diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT; Carlos del Frade, diputado Santa Fe, Frente Social y Popular; Myriam Bregman y Alejandrina Barry legisladoras CABA PTS /FITU; Néstor Pitrola, diputado nacional (MC) y Gabriel Solano, Legislador CABA PO/FITU; Vilma Ripoll, legisladora (MC) MST/FITU; Angélica Lagunas, dirigente de ATEN Capital y concejala por Neuquén de Izquierda Socialista/FITU; Jorge Altamira y Marcelo Ramal (Partido Obrero Tendencia); Noelia Agüero, legisladora electa por Córdoba Izquierda Socialista/FITU; Héctor Heberling y Alcides Christiansen (Nuevo MAS); Liliana Olivero, diputada (MC) por Córdoba Izquierda Socialista/FIT; Raúl Godoy, obrero de Zanon, Diputado (MC) por Neuquén PTS/FITU; Laura Marrone, dirigente docente y legisladora (MC) CABA Izquierda Socialista/FITU; Claudio Dellecarbonara, miembro de la directiva de Agtsyp (subte/metro Buenos Aires) y diputado Buenos Aires; Nicolás Nuñez, legislador electo CABA Izquierda Socialista/FITU; Alejandro Vilca, recolector de basura y diputado por Jujuy PTS/FITU; Merce-

des Trimarchi, dirigente de la agrupación de Mujeres Isadora y diputada (MC) por Buenos Aires Izquierda Socialista/FITU; Laura Vilches, concejala de la ciudad de Córdoba PTS/FITU; Alfredo Leytes, concejal electo ciudad de Córdoba Izquierda Socialista/FITU; Ezequiel Peressini, legislador (MC) por Córdoba Izquierda Socialista/FITU; Vanesa Gagliardi, legisladora porteña electa MST/FITU; Mercedes de Mendieta legisladora electa CABA Izquierda Socialista/FITU; Andrés Blanco, diputado por Neuquén PTS/FITU; José Castillo, economista y dirigente de Izquierda Socialista; Edgardo Reynoso, dirigente ferroviario del cuerpo de delegados del ramal Sarmiento; Ileana Celotto, secretaria general AGD UBA; Jorge Adaro, secretario adjunto Ademys (docentes de CABA); Miguel Del Pla secretario general CTA - A Sta Cruz; Pablo Almeida, delegado general ATE Ministerio Economía Nación; Guillermo Pacagnini, secretario general Cicop; Graciela Calderón, secretaria adjunta Suteba La Matanza; Cristian Luna, secretario general SITE (enfermeros Tucumán); Mónica Méndez, secretaria de organización Cicop; Federico Navarro delegado UOM Aluar seccional Puerto Madryn, Chubut; Daniela Vergara, secretaria de Derechos Humanos de Amsafe Rosario; Raquel Blas, secretaria general CTA-A Mendoza; Adriana Astolfo, directiva Adosac Pico Truncado; Daniel Rapanelli, secretario general Suteba Ensenada; Juan Arturo Gómez, secretario de Acción Social y Jorgelina Matusевич, secretaria de Acción Social Suplente, Conadu Histórica; María Dematteis, delegada Textilana AOT; Cristian Paletti minoría Agtsyp (subte/metro Buenos Aires); Silvia Fernández, secretaria gremial Suteba Tigre; Matías Tomasello, miembro rotativo de directiva Foetra (telefónicos).

Agrupaciones y corrientes sindicales, de derechos humanos y de mujeres: Coordinadora Sindical Clasista; Agrupación de Mujeres Isadora; Comité de Acción Jurídica (Integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos); Corriente Político-Sindical "Rompiendo Cadenas"; Docentes en Marcha; ANCLA (Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática); Lista Bordó Ferroviaria; Encuentro Militante Cachito Fukman; Movimiento de los Pueblos: Por un socialismo feminista desde abajo (Frente Popular Darío Santillán - Corriente Nacional, Izquierda Latinoamericana Socialista, Estatales en Marcha; Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Movimiento 8 de Abril); Comisión de Vecinos Justicia por Campomar; H.I.J.O.S. zona Oeste; Corriente Sindical 18 de Diciembre; APEL (Asociación de Profesionales en Lucha); Herman@ en Rebeldía.

Siguen centenares de firmas más de Argentina y del mundo...

Ver en las páginas de cstpsol.com o uit-ci.org

Estados Unidos. Bayer acuerda indemnizar a enfermos de cáncer provocado por el glifosato

El gigante farmacéutico y agroquímico alemán Bayer anunció el 24 de junio que acordó pagar hasta 10.900 millones de dólares en un acuerdo con 125.000 demandantes estadounidenses que dicen que el herbicida Roundup, que contiene glifosato, fabricado por la unidad Monsanto, es el causante del cáncer que padecen. El acuerdo “permitirá cerrar aproximadamente el 75% de los actuales casos de litigación relacionados con Roundup”, informó la compañía con sede en Alemania.

El mismo herbicida cancerígeno se utiliza en otros países, como Brasil, Argentina y Bolivia. En la Argentina hubo fuertes movimientos de pueblos fumigados (afectados por la multiplicación de casos de cáncer) y se lograron algunas limitaciones, aunque se sigue empleando.

El Roundup-glifosato extermina todo lo que hay alrededor del cultivo de soja transgénica –que es resistente a este herbicida– que “molesta” su crecimiento. Pero además afecta a las personas que desarrollan esta actividad, a las que viven cerca de los terrenos fumigados y a los alimentos.

Brasil. Huelgas de trabajadores del metro y de repartidores

Los trabajadores del metro (subterráneo) de San Pablo anunciaron una huelga el 1º de junio contra un ajuste a sus condiciones de trabajo que dictó João Doria, gobernador del estado, del PMDB (partido patronal que gobernó hasta 2016 junto al PT y ahora es supuesto opositor de Bolsonaro). Se



está desconociendo el acuerdo colectivo en un momento en el que hay un número importante de contagiados y un dirigente del sindicato fallecido por Covid-19 porque no se cumplió la cuarentena.

Entretanto, los repartidores van a realizar un paro nacional por aumento de sus remuneraciones y mejores condiciones de trabajo. Como ellos lo explican, trabajan con hambre entregando comida y están realizando un servicio esencial en medio de la pandemia. Denunciaron también que si un trabajador se enferma de Covid-19, tiene un accidente o se golpea en su bicicleta es despedido.

Estas huelgas se dan en medio del desastre de la salud en Brasil, que ocupa el segundo puesto en el mundo por la cantidad de víctimas del Covid-19, con 58.000 muertos y 1.350.000 infectados (cifras oficiales, probablemente la realidad sea mucho peor) hasta este fin de semana.

La CST/PSOL, sección oficial de la UIT-CI, llamó a apoyar estas huelgas y a unificar las luchas en un marco en que toda la clase trabajadora “está en la mira de la contaminación y las muertes” y exige a las direcciones de las centrales sindicales CUT, CTB, Força Sindical y UGT que apoyen las luchas y convoquen a un día nacional de lucha en defensa del salario, el empleo y por medidas de seguridad estrictas para los que trabajan.

Alemania. Huelga de trabajadores de Amazon por contagios

Cerca de cuarenta empleados de Amazon tienen coronavirus. Por este motivo iniciaron una huelga este lunes exigiendo mayores normas de seguridad. La medida, de cuarenta y ocho horas, cuyo lema es “trabajo bueno y saludable”, es para denunciar lo que han llamado falta de transparencia por parte de la empresa estadounidense ante la ola de contagios de Covid-19 entre sus trabajadores. Los paros se realizan en las sucursales de Leipzig, Bad Hersfeld, Rheinberg, Werne y Koblenz.

La compañía tiene aproximadamente 13.000 empleados en Alemania.

Cabe destacar que Amazon, especializada en entregas a domicilio, aumentó sus ganancias a nivel mundial durante la pandemia.

En los últimos meses, los trabajadores de los almacenes de Amazon en los Estados Unidos realizaron protestas también en contra de las condiciones laborales insalubres, denunciando que la compañía no notifica cuando sus compañeros dan resultado positivo en el test de coronavirus.

Curazao. Violentas protestas contra rebaja salarial y despidos

El recorte salarial de 12,5% y el despido de más de cuatrocientos trabajadores públicos provocaron fuertes protestas. Fueron incendiados vehículos policiales durante las manifestaciones. La isla caribeña está convulsionada por los injustificados despidos que afectan a los empleados portuarios. Y, aunque el gobierno implantó el toque de queda, las protestas continuaron.

PARTIDO

Llegó la época del año en la que nuestro partido realiza su campaña financiera. Solicitamos tu aporte económico para poder sostener todas nuestras actividades, siempre al servicio de las luchas del pueblo trabajador y de los sectores populares, acompañando los reclamos sindicales, de las mujeres, de la juventud y de los jubilados.

Somos un partido de trabajadores. Izquierda Socialista se construye sobre la base del esfuerzo cotidiano de sus integrantes y los aportes que realizamos los militantes, simpatizantes y amigos. Todo lo contrario de lo que hacen el Frente de Todos, la UCR y Juntos por el Cambio, partidos patronales que son financiados por grandes capitalistas y multinacionales.

El momento que estamos atravesando es complicado, lo sabemos. En medio de la pandemia muchos compañeros perdieron su trabajo y viven de changas. El que tiene la suerte de mantenerlo cobra un salario rebajado y devaluado. Es lo que nos toca vivir a todos los trabajadores en esta profunda crisis.

Comprendemos la situación, pero a su vez insistimos en que hagas un esfuerzo para ayudarnos. Tu aporte, sea cual fuere, es importante para Izquierda Socialista. Nos permitirá hacer llegar nuestras propuestas a más escuelas, barrios y fábricas. Nos posibilitará continuar exigiendo, junto a los trabajadores de la salud, más presupuesto para los hospitales y que no falten los elementos de seguridad, los insumos y las camas con el devenir de los contagios.

Podremos continuar peleando, junto al sindicalismo combativo, por una nueva dirección sindical combativa y democrática que le ponga el punto final a la vieja burocracia traidora de la CGT, la que firma con la UIA la rebaja salarial y la entrega de los convenios colectivos.

Tu esfuerzo fortalecerá nuestra lucha por impulsar y desarrollar el Plenario del Sindicalismo Combativo, que busca la coordinación de todas las luchas en curso y las que vendrán. En este sentido, alentamos la integración de los nuevos luchadores con los ferroviarios del Sarmiento, con el Sutna y los Suteba Multicolor que, junto con los docentes de Ademys, batallan por una educación pública gratuita y de calidad.



CAMPAÑA FINANCIERA

Te pedimos tu colaboración

CAMPAÑA FINANCIERA

Te pedimos tu colaboración

Con tu colaboración nuestras compañeras de Isadora continuarán levantando el pañuelo verde por el aborto legal, seguro y gratuito y contra la violencia de género.

También podremos seguir dando la pelea por la defensa del medioambiente, contra la megaminería contaminante de Barrick Gold, la deforestación y la contaminación de nuestro país y el planeta de la mano de empresas como Chevron y Monsanto.

Y también tu ayuda servirá para que sigamos construyendo la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores (UIT-CI), para apoyar las luchas de todo el mundo.

Tu aporte hará posible que continuemos con la construcción de este partido que, en nuestro país y en el mundo, luche en cada lugar de trabajo y en las calles por un gobierno de los trabajadores y el socialismo